

REBELDES Y PATRIOTAS EN ACCIÓN: LA “**revolución**” DEL PUEBLO EN 1808

Paulo Jorge Fernandes*

El 27 de noviembre de 1807, Lisboa fue testigo de un acontecimiento extraordinario, sin paralelo en la historia de la Europa moderna. La familia real portuguesa, acompañada de lo mejor de la aristocracia del reino, llevando un ejército de sirvientes, funcionarios y sus respectivas pertenencias, embarcaba apresuradamente en la flota que la llevaría a Brasil. Atrás dejaba un país a merced de los soldados de Napoleón. Por delante se entreveían un viaje incómodo y un futuro incierto.

Los preparativos para la partida del príncipe Don Pedro (futuro rey Don Pedro IV de Portugal y I de Brasil) y toda la Casa Real llevaban meses, pero las noticias de la entrada del ejército invasor a territorio nacional con el objetivo de tomar Lisboa y prender al regente, obligaron a que todo se decidiese y preparase en dos días. Las últimas horas de la Corte en territorio europeo serían captadas con realismo en una pintura al óleo de Nicolas Delerive que alcanzó gran divulgación en la época. La representación fijó la imagen oficial del momento. Los trazos del pintor francés mostraban la sobriedad y el escaso aparato de los preparativos realizados en el muelle de Belém que antecedieron la partida de tan ilustre comitiva. El aparente orden y la calma captados por el artista contrastaban, entre tanto, con las instantáneas captadas en la calle. El pueblo, inquieto, temeroso y asustado, deambulaba tumultuosamente por los principales caminos de la ciudad. En cada esquina, la gente se amontonaba para escuchar los últimos edictos reales. Los franceses se aproximaban. Nadie sabía cómo sería el

día siguiente. La mayoría de la población, naturalmente, se sentía desamparada.

A pesar de la supuesta confusión que se había instalado en la capital, la familia real no estaba conmovida simplemente, presa del miedo. El traslado de la sede del poder de la dinastía de Bragança desde Europa hacia los trópicos, algo nunca visto en la crónica de los imperios, obedecía a un antiguo plan que las circunstancias obligaron a anticipar con diligencia. Se trataba de una simple cuestión de sobrevivencia política. Quedarse significaba, muy probablemente, el fin de la independencia del país y la cárcel. Partir aseguraba la continuidad de esa autonomía aunque en un escenario geopolítico enteramente nuevo. Tales fueron los cálculos que los consejeros de la Corte hicieron con urgencia en aquel final de noviembre de 1807.

La principal cara de la resolución final era el príncipe Don João, considerado por muchos un gobernante influenciado, débil y mal preparado para el cargo que ocupaba. Don João dirigía el reino desde 1792. Era regente formalmente desde 1799, asegurando la continuidad de la Corona en nombre de su madre, Doña Maria I, quien había sido declarada definitivamente incapaz para desempeñar las funciones reales. Durante siete años firmó despachos en nombre de la reina, con la esperanza de que ella pudiese recuperar la cordura. A los 18 años de edad, en 1885, casó con una princesa española, Doña Carlota Joaquina, unos ocho años menor que él, pero conservadora en las costumbres y de personalidad demasiado fuerte para lo que la Corte estaba habituada. Hubieron de esperar cinco años para consumar su matrimonio. Poco tiempo después ya vivían en palacios separados. Con estos antecedentes, Don João ganó fama de ser un hombre vacilante, fácilmente dominable por

*Investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Correo electrónico: paulojorgefernandes@sapo.pt
Traducción del portugués de Marco Lara Klahr.

otros, algo pusilánime y alejado de los negocios del Estado. Tal reputación se revelaría injusta.

Don João, él mismo segundo hijo, no había nacido para tomar este tipo de decisiones. Un conjunto de infelices casualidades lo condujeron a un lugar que no era el suyo por nacimiento. La madre, la primera mujer de la historia portuguesa en ocupar el trono, enloquecerá y será considerada no apta para gobernar después de que, en apenas seis años, había perdido a casi toda la familia más próxima y a su confesor espiritual; el padre, el rey consorte Don Pedro III, morirá en 1886, y el hermano mayor, príncipe heredero Don José, había sido víctima de viruela en 1788. Quedaba Don João, quien heredó el título de príncipe de Brasil y con él la responsabilidad de, un día, asegurar el mando de la monarquía. En 1815 sería aclamado como el rey Don João VI.

Con todo, desde que llegara a jefe de Estado revelaría una lucidez sorprendente, apostando por la continuidad de las medidas que heredara del gobierno de su madre. Resistió la tentación de dejarse caer en manos de un ministro poderoso, evitando lo que había acontecido a su abuelo, el rey Don José (1755-1777), quien fuera dominado por el marqués de Pombal, su principal valido. Siempre repartió el poder, nunca favoreció "partidos" y procuró situarse por encima de facciones, lo que le valió aquella imagen de débil e indeciso explotada por sus enemigos. Esta representación sería difundida por las circunstancias en las que asumió la regencia y por las circunstancias de la época, pero Don João promovió bastantes iniciativas consideradas como "esclarecidas" y "modernas". Lanzó la Junta de Dirección General de Estudio y Escuelas del Reino (Carta Real del 17 de diciembre de 1794); fundó la Biblioteca Pública de Lisboa (Licencia del 27 de febrero de 1796), nombrando como primer director a António Ribeiro dos Santos, uno de los hombres célebres más ilustrados del reino; revitalizó el Consejo de Estado (1796); dio seguimiento a la ofensiva contra los poderes jurisdiccionales de los donatarios de la Corona, por la vía de expropiaciones de los bienes de la Iglesia y de los cuerpos de *manos muertas* (Ley del 9 de septiembre de 1796 y Licencia del 23 de febrero de 1797); nacionalizó el Correo-Mor (18 de enero de 1797) e inauguró el servicio de valija postal, la antepasada del correo; concluyó en 1798 las obras de la carretera que unía a Lisboa con Coímbra, la única vía presentable entonces en el país, asegurando la correspondencia entre la capital y aquella ciudad universitaria; reformó las secretarías de Estado,

promoviendo la de Hacienda y separando la de Asuntos Extranjeros de la de Guerra (1801); creó la Guardia Real de Policía (el 10 de diciembre de 1801) para intervenir en el gobierno de Lisboa; promovió censos demográficos y la estadística moderna; mandó construir nuevos cementerios para responder a problemas sanitarios. Sin embargo, el liderazgo de Don João, a nivel interno, sufrió demasiado con el desgaste provocado por la abierta división en el seno de las élites nacionales en torno de las principales opciones a tomar en materia de política exterior.

Don João llegó al gobierno en una época de gran agitación internacional. Prácticamente todo el espacio europeo había sido agitado por una sucesión de revueltas, guerras y convulsiones sociales que desfiguraron por completo el paisaje político del viejo continente. Las ondas de choque de tal conmoción, cuyo epicentro se localizaba en París, rápidamente se extendieron al resto de Francia y, en seguida, a los cuatro extremos de Europa sin perdonar gobiernos despóticos, dinastías antiguas, instituciones seculares, señores poderosos o plebeyos inocentes. La Revolución descabezó la monarquía de los Borbones, la República creará una cantidad de Estados periféricos considerados "amigos" de Francia, y el Ejército vio surgir un joven oficial de Córcega, su jefe y más tarde Emperador. La ideología revolucionaria se volvió exportable por la vía de las armas. Durante cerca de una década el Gran Ejército de Bonaparte se volvió una potencia invencible. Uno a uno, todos los países de Europa fueron absorbidos por este torbellino.

Aunque periférica en el contexto político internacional, la posición de Portugal se reveló determinante para el futuro de la contienda por la hegemonía continental. Por un lado, emergía Francia, que pretendía imponer su voluntad a todo el continente, auxiliada por un conjunto de Estados "satélite", mientras que por el otro se posicionaba Gran Bretaña, la gran potencia marítima mundial, interesada en mantener el estatuto contra la preponderancia gala. Diplomáticamente, Portugal tenía que tomar una opción y tomó la decisión, en cuanto fue posible, de no decidir en materia de política exterior.

A unas alturas en las que las relaciones entre Estados se basaban en alianzas extremadamente volátiles entre potencias, el reino quedó como rehén de su relación con España, el único país con el que mantenía fronteras terrestres, y el entendimiento que estableciese con Gran Bretaña, con el cual compartía una historia común de

alianzas que se remontaba al siglo XIV. A principios del XIX la sobrevivencia del pacto entre los reinos de María I y Jorge III dependía de que persistiera el interés británico en la conservación del sistema imperial portugués. Si durante la primera mitad del siglo XVIII la ventaja de la alianza era clara por razones esencialmente comerciales, una vez que el espacio luso-brasileño se reveló fundamental para el flujo de la producción industrial británica, las ventajas de la alianza comenzaron a reducirse para el lado inglés cuando el oro brasileño, con el cual Portugal pagaba las exportaciones británicas, comenzó su declive. Esta relación encerraba algunos peligros. El matrimonio por conveniencia funcionaba como un seguro de vida para la independencia del imperio portugués, es decir, las relaciones entre la metrópoli y Brasil, pero también abría la posibilidad de una acción militar apuntando al desmembramiento del mismo espacio imperial, ejercicio para el cual Portugal no tenía defensa. El gobierno de Lisboa sabía que un cambio de su política de alianzas podría tener consecuencias desastrosas. Era esencial, por ello, mantener a Portugal en la órbita británica.

Por otro lado, el reino mantenía una convivencia diplomática complicada con sus vecinos españoles. El Tratado de Pardo, firmado en 1778, sirvió para declarar la paz y reforzar la amistad entre ambos Estados, puesta en riesgo después de la pérdida de la colonia portuguesa de Sacramento, en la frontera sur de Brasil, para España. Se ensayó, entonces, una aproximación a la corte vecina fundamentada en una política de casamientos, de la que el principal resultado fue el matrimonio del príncipe Don João con Carlota Joaquina, hija del príncipe de Asturias, el futuro rey Carlos IV. Aunque las relaciones entre los dos países se distendieron, los apetitos expansionistas castellanos no fueron satisfechos. El futuro cercano se encargaría de probar tal tesis.

En este contexto, las oscilaciones diplomáticas vendrían a ser una constante en los años siguientes. Portugal fue forzado a seguir una incoherente y persistente "contrariedad de principios" en términos de política exterior. Desde la Guerra de los Siete Años se optó por la fórmula de neutralidad en una tentativa por evitar el involucramiento en una disputa entre las dos principales potencias europeas. En mayo de 1762, el ejército franco-español invadió el país. Para evitar mayores males, el marqués de Pombal llegó a plantear la hipótesis de trasladar la Corte a Brasil. Quedaba la advertencia, pero la imparcialidad en cuestiones externas siguió sien-

do sostenida al sobrevenir la guerra de independencia de Estados Unidos de América.

Desde el punto de vista formal y el que dictaba el respeto a la diplomacia, el gobierno de Doña María I consiguió mantener su tradicional equidistancia respecto de los problemas continentales hasta finales de 1792. La evolución de la situación política en Europa Central y el aumento de las probabilidades de ingreso de España y Gran Bretaña al conflicto europeo apresuraron, aunque contra la voluntad gubernamental, la disolución de la imparcialidad nacional. Después de que la Convención hubo declarado la guerra a Londres, el 1 de febrero de 1793, y de que Madrid mostró su disposición a integrar la coalición antifrancesa, no había manera de que Portugal se mantuviera al margen de los combates.

Las fuerzas lusitanas participaron en la Campaña de Rossilhão (1793-1795) después de que Madrid hubo requerido al gobierno de Lisboa el envío de una división auxiliar que vendrían a integrar cerca de 6 mil soldados de infantería y artillería, comandados por un viejo general escocés. Aunque protagonizaron algunas acciones valerosas, los militares no pudieron evitar el resultado negativo de las operaciones. Tampoco desde el punto de vista político se obtuvo provecho alguno. Más allá de las pérdidas materiales en hombres y equipamiento, y de las alarmantes consecuencias financieras del involucramiento en la guerra de los Pirineos Orientales, el desenlace del conflicto trajo una sorpresa inesperada, cuando la República y el gobierno de Carlos IV firmaron secretamente la Paz de Basilea, en julio de 1795, sin rendir cuentas a su homólogo de Lisboa.

El cambio de prioridades en la política exterior española obligó a rediseñar los equilibrios ibéricos, pues este acuerdo, deliberadamente hostil a los intereses británicos, volvía prácticamente imposible el mantenimiento de la única línea con rumbo convincente de la diplomacia nacional de cara a la nueva coyuntura europea, la neutralidad, ante la más que probable guerra entre España e Inglaterra. El inicio de hostilidades entre los antiguos aliados, en octubre de 1796, volvió a agitar viejos fantasmas. El gobierno del príncipe Don João más de una vez habría de tornar compatibles la defensa de las colonias y el tráfico ultramarino, con la seguridad de las fronteras continentales, en un ejercicio arriesgado que duraría hasta 1807.

Ante la inestabilidad de este equilibrio, en el reino resaltarían rápidamente las divergencias entre los simpatizantes de un acercamiento a Francia y los adeptos

de una facción pro inglesa, divididos por la apreciación que ambos extremos hacían respecto de las ventajas políticas y económicas de las diversas alianzas posibles. Hasta 1803, los ejes principales de la política exterior portuguesa fueron determinados casi exclusivamente por el llamado “partido inglés”, que continuaba pregando las bondades del Tratado de Methuen, firmado en 1703. En contraste con esta estrategia, resultaba evidente en los círculos gubernamentales la oposición a cualquier ajuste comercial con Francia que vulnerase las relaciones con Gran Bretaña. La dependencia del mercado británico para el flujo del más importante producto agrícola portugués —el vino— y la vulnerabilidad del tráfico colonial por los asaltos de la más poderosa flota naval de aquel tiempo aconsejaban esta orientación. En el plano militar, mientras tanto, al aproximarse el final del siglo XVIII, las operaciones iban a todo correr para los ejércitos revolucionarios en el teatro de la guerra europea, produciendo la perspectiva poco agradable de que éstos podrían voltear su atención en cualquier momento hacia el extremo occidental de la península ibérica. La diplomacia portuguesa intentó entonces varias maniobras dilatorias con resultados imprecisos, negociando con ingleses y franceses simultáneamente. Entre tanto, correrían en Lisboa ciertos rumores que daban cuenta de las peticiones de las autoridades francesas a las de sus homólogas españolas, en el sentido de que éstas les permitieran la apertura de un corredor para facilitar el paso de un cuerpo del ejército tricolor para atacar Portugal.

Las sucesivas victorias de Bonaparte alimentaron las presiones de Madrid que perseguían, una vez más, la interdicción de los puertos lusitanos a los navíos de Su Majestad británica, a lo cual el gobierno de Lisboa reaccionó con notable placidez, aunque sin hacer causa común con la vieja alianza. Con el aumento de la tensión entre Portugal, Francia y España, y la inminencia de una incursión militar, volvió a hablarse de la salida de la Corte a Brasil o, eventualmente, a la isla de Madeira. La situación se mantuvo en esta indefinición por algunos meses, hasta que en mayo de 1801 se asistió a la temida invasión de Alentejo por parte de un contingente franco-español. Esto marcó el inicio de la llamada “Guerra de las Naranjas”. La correría estaba destinada, mientras tanto, a obtener una posición de fuerza en las negociaciones de paz que concluirían en breve entre Francia e Inglaterra.

Del lado portugués, los preparativos, igual que las propias acciones de resistencia, fueron conducidos con

poca convicción, siendo irritante la lentitud con la que los comandos militares se aprestaron a ocupar sus puestos. Iniciada la campaña, se rindieron enseguida las plazas de Olivença y Juromenha, en tanto Portalegre y Castello de Vide fueron abandonadas sin reacción. El siempre prometido auxilio inglés nunca llegó. La alegada incompetencia de las jefaturas portuguesas, que hacía desesperar a los elementos de la facción pro británica del gobierno, no explica el reducido empeño puesto en los combates, que se entiende mejor por la convicción generalizada de que la campaña no pasaba de un episodio más del ascenso de la lucha diplomática en esa época.

Los ajustes a la paz efectuados en Badajoz, tierra del influyente ministro español Manuel de Godoy, no tranquilizaron a los negociadores lusitanos. Las ambiciones territoriales de España fueron apaciguadas con la posesión de la villa fronteriza de Olivença, exigiendo también Carlos IV el pago de los gastos hechos, pero nunca pagados, cuando la retirada portuguesa de Cataluña, al final de la Campaña de Rossilhão. Lisboa aceptó igualmente el cierre de sus puertos a los navíos británicos, lo que no cumpliría, y el pago de una pesada indemnización de guerra a Francia, a la cual cedía también territorios en Guyana y facilidades comerciales en Europa. El gobierno de Don João conseguía así recuperar el siempre ambicionado estatuto de neutralidad, aunque a costa del aumento de la influencia gala.

La defección británica de 1801 y el rechazo, dos años más tarde, de la petición de auxilio militar y financiero que Lisboa dirigió a su aliado, vieron reforzar la tesis del “partido pro francés” en el ministerio, consumándose el alejamiento de la “facción inglesa” en la remodelación gubernamental ocurrida en el verano de 1803. El cambio confirmaba la disposición del regente a seguir una política de conciliación respecto de Francia, reduciéndose al mínimo las tensiones con aquel país, lo que no dejó de perturbar la convivencia con el *Foreign Office*.

Una vez más, sería la evolución de la situación internacional la que echaría las cartas de la política externa portuguesa. Cerca de la Navidad de 1803 y después de un incidente naval, el gobierno de Madrid declaró la guerra a Gran Bretaña, despertando los planes de anexión del colaboracionista Manuel de Godoy, en suspenso desde 1801. El gabinete fue entonces presionado en el sentido de tomar más abiertamente el lado de Francia en la cuestión, quedando a salvo de males mayores por la derrota de la armada franco-española en Trafalgar, que

contuvo los ímpetus castellanos, aprovechando Lisboa para reafirmar el mantenimiento de su imparcialidad en el conflicto. El general Andoche Junot, en su calidad de nuevo embajador en Lisboa, llegó a amenazar con dar su apoyo a España en caso de una invasión inmediata de Portugal si éste no cerraba los puertos nacionales a los navíos ingleses y no se verificaba la ruptura de las relaciones diplomáticas con Londres. Don João y sus ministros, como venía siendo hábito en ellos, nada decidieron.

Entre tanto, el fracaso marítimo de octubre de 1805 sirvió para mostrar a Napoleón que la única solución para imponer la paz a Inglaterra sería la determinación de un bloqueo continental que afectase de manera decisiva de los intereses económicos de aquel país en el continente. El plan se basaba en el embargo de todas y cada una de las mercaderías británicas, el encarcelamiento de sus comerciantes y el secuestro de sus respectivas mercancías y bienes. Para que la idea resultase era necesaria la colaboración de la Costa Atlántica, siendo en este dominio que la posición portuguesa asumía un papel determinante. En otras palabras, la intervención lusa en el cerco era una de las condiciones para su éxito.

De amenaza en amenaza, las presiones sobre la neutralidad de Lisboa crecieron diariamente para aflicción del gobierno, que se vio sin salida. Si Manuel de Godoy no había desistido de continuar sus insistencias junto a París para hacer resurgir sus planes de partición de Portugal, los ingleses intentaron forzar el alineamiento de la política exterior de su aliado en la Península Ibérica con posiciones claramente hostiles hacia Francia. Napoleón, confiado por las victorias militares al este y por el entendimiento con el zar Alejandro de Rusia, exigió la detención de los súbditos de Jorge III, la confiscación de sus riquezas y propiedades, y la declaración de un estado de guerra entre portugueses y británicos. El ultimátum enviado por Talleyrand expiraba a finales de agosto de 1807, bajo pena de una invasión franco-española. El último día del plazo, a la manera portuguesa, el secretario de negocios del reino comunicó al embajador de Bonaparte que el regente concordaba finalmente con el cierre de sus puertos, pero no accedía a encarcelar a los ciudadanos británicos en territorio nacional, dando cuenta también de la intención de enviar al primogénito de la familia real a Brasil. El proyecto fue mal recibido por el Emperador, que lo entendió como una inaceptable concesión más a los ingleses. A esas alturas, la invasión de Portugal era irreversible. El 29 de julio

de 1807 fue entregada a Junot, gobernador de París y antiguo embajador en Lisboa, el mando del Ejército de Girona, destinado a ocupar el país.

Conforme avanzaban las obras para la protección de la barra de Tejo, temiéndose un ataque inglés los representantes de París y Madrid abandonaron Lisboa, en una clara demostración de la existencia de un estado de guerra entre aquellos países y Portugal. La orden de marcha para la invasión llegó el 12 de octubre. Una semana después y con sus opciones ya agotadas hace mucho, el gobierno, abandonando la política de neutralidad, anunció su adhesión al Bloqueo Continental, comunicando a principios del mes siguiente su acuerdo con todas las pretensiones francesas, incluyendo el encarcelamiento de ingleses en Portugal, medida de alcance muy reducido en virtud de que la mayoría de aquellos ciudadanos residentes aquí ya había abandonado el país en varios convoyes navales. Ya era demasiado tarde. Los invasores tenían divididos hasta los despojos de la conquista. Por el Tratado de Fontainebleau, del 27 de octubre, Portugal fue rebanado en tres rodajas: la región Entre-Douro y Minho (la llamada "Lusitania Septentrional"), con Oporto como capital, fue entregada a la soberanía del rey de Etruria; Alentejo, Algarve y las Indias fueron ofrecidos a Manuel de Godoy; Trás-os-Montes, Beiras y Estremadura quedaron para Napoleón. El Emperador había decidido extinguir la monarquía portuguesa.

El ejército invasor, compuesto por tres divisiones españolas y cuatro francesas, comandado por el general Andoche Junot, cruzó la frontera portuguesa en Beira Vaixa, el 19 de noviembre. A marchas forzadas, venciendo el clima adverso, la falta de caminos y las dificultades de abastecimiento, los galos alcanzaron Abrantes el 24 de noviembre. Dos días después, ya con la decisión de abandonar Europa y con los franceses a las puertas de Lisboa, Don João designó un Consejo de Regencia que representaría la legítima autoridad en nombre de la Corte ausente. Este órgano recibió instrucciones para acoger a los conquistadores con simpatía. Debía preservarse la paz, incluso si eso significase "colaboracionismo".

Ante la inminente llegada de los soldados imperiales el embarque se hizo a prisa en un largo 27 de noviembre de 1807. Doña Maria, la reina loca, ante el frenesí de los criados que la hicieron subir a bordo de forma ruda, tenía aconsejado tomárselo con calma; no fuese alguien a pensar que huiría. En un primer análisis, la confusión

instalada en el muelle de embarque, en Belém, como el pueblo se amontonara junto al regente a exigirle explicaciones sobre lo que sucedía, ofrecía pocas dudas. No parecía la retirada estratégica defendida por los principales consejeros del contrariado Don João, sino una anárquica desbandada. Una segunda lectura permite percibir que se trató de un momento decisivo. A pesar de lo incómodo del largo viaje, la medida tenía ventajas obvias. Se evitaba la humillación ante los franceses y se mantenía la independencia de la Corona, algo que los españoles no habían conseguido, aparte de que se abría la posibilidad de fundar una nueva monarquía en el Nuevo Mundo. Se trató de la decisión política más importante y difícil de tomar por un gobernante en los tiempos modernos.

Debido al mal tiempo, la flota, que contaba con un total de quince navíos, apenas logró salir de la barra de Lisboa el 29. No se sabe con certeza cuántos acompañaban a la familia real aquel día. Las estimaciones varían entre 500 y 15 mil individuos. Una evaluación más reciente apunta entre cuatro y siete mil personas. Puesto que no amainaban la lluvia y el viento, el 28 de noviembre el representante diplomático de Londres, ya refugiado, vino de tierra firme por breves momentos, para asegurar al regente Don João el apoyo de la armada británica en el viaje que la Corte se preparaba a iniciar. Al día siguiente, los pelotones del frente de *Grand Armée* entraban en Lisboa. Finalmente, no pasaba de una banda de gente harapienta, soldados descalzos y hambrientos, sin un cartucho en estado útil, cayéndose de sueño y frío.

Junot, que conocía bien las costumbres locales, encontró un país dócil y rendido al orden de cosas. Garantizó protección contra la maligna influencia inglesa, anunció amnistías, prometió obras públicas, una administración eficaz y el saneamiento financiero de las cuentas públicas, y procuró tomar las providencias necesarias para tomar el control del país, nombrando a su gente para puestos clave. El Ejército español pasó a controlar gran parte del territorio, de Coimbra hacia arriba, tanto como al sur, de Tejo a Algarve, quedando la zona central entregada a los franceses. El Tratado de Fontainebleau sería rápidamente olvidado.

La expectativa benevolente creada por la presencia de Junot en Lisboa rápidamente dio lugar a una creciente animosidad. A mediados de diciembre irrumpieron en Lisboa los primeros motines contra los invasores después de que la bandera francesa fue izada

sin la portuguesa al lado. La agitación corrió por cuenta de la plebe urbana, sirvientes sin amos que servir y oficiales mecánicos lanzados al desempleo debido a la paralización de la economía. La represión fue violenta, fusilándose a los sospechosos. Mientras que las élites portuguesas cumplían las últimas voluntades de Don João, no enfrentando al comando militar francés, el pueblo comenzó a sublevarse contra los invasores. Para agravar la animosidad, a finales de 1807 el Emperador ordenó que se lanzase un impuesto de guerra y se hiciesen requisiciones agrícolas, que se confiscasen los bienes de la Casa Real y los nobles que habían partido, y que se recogiesen el oro y la plata de las iglesias, así como que se redujesen los regimientos de Caballería e Infantería a una cuarta parte, al mismo tiempo que se formaba una Legión Portuguesa para combatir al lado del Ejército Imperial. El 1 de febrero de 1808 Junot disolvió el Consejo de Regencia y despojó a la casa de Bragança de sus prerrogativas, lo que sirvió para animar y generalizar las revueltas antifrancesas por todo el país.

El 2 de mayo de 1808 una insurrección en Madrid, que sería prontamente aplastada por Murat, provocó un levantamiento patriótico por toda España. En menos de un mes, como por contagio, el efecto llegó a Portugal. Aun antes de finales de mayo brotaron rebeliones en el interior del país proclamando la autoridad del distante Don João. A principios de junio, cuando los Ejércitos españoles abandonaron Portugal, una sublevación general tomó cuenta del Algarve, Trás-os-Montes y Minho. Los motines fueron promovidos por "la gente baja", el pueblo. Los rebeldes no pretendían sólo destruir al invasor, querían dominar el territorio. La lucha asumió el aspecto de una auténtica guerra de "reconquista".

Fue la plebe la que lideró la sedición nacional. Los pescadores, los trabajadores rurales, los campesinos, los artesanos, los comerciantes pobres, los empleados públicos necesitados tomaron la iniciativa. Aquí y allá aparecían militares, religiosos (seculares y regulares), magistrados y hasta señores locales, aunque surgieron en reducido número y nunca partió de ellos el gesto decisivo. La deposición del regente se extendían como una especie de contaminación. Cuando se recibía la noticia de que la tierra vecina se había levantado, alguien seguía el ejemplo hasta irrumpir bandos de patriotas a proponerse la liberación del sitio y dar caza a los sospechosos. Las guerrillas se encargaban entonces de perseguir y eliminar a todos los colaboracionistas. Los

rebeldes no actuaban con delicadeza. Se hablaba de una auténtica "revolución", es decir, la liquidación abrupta y violenta del orden establecido, sufriesen los señores lo que sufriesen, fuesen ellos quienes fuesen. Por todo el reino la cólera popular tenía rienda suelta, desencadenando acciones violentas ante el mínimo obstáculo, provocación, vacilación o desconfianza. Los "grandes", los "ricos" y los "afrancesados" quedaron a merced de la ira popular, cometiendo demasiados excesos. En ninguna aldea o villa de importancia dejó de ajustarse cuentas. Estábamos ante el equivalente portugués de la *Grand Peur* de 1789.

Al inicio del movimiento, la persecución contra los ocupantes sirvió de pretexto para todo tipo de asaltos, búsquedas, saqueos, incendios y aprehensiones, mientras que en los sitios donde nunca había habido franceses el odio popular se volcó contra los notables locales y los "patrones". El concepto de opresor se tornó más extenso. En los campos, bandos de campesinos miserables y mal armados comenzaron por atacar a los propietarios de las tierras, los renteros y los magistrados, para seguir con los pequeños comerciantes, considerados usureros. Sin sorpresa, los tumultos fueron más severos en las zonas del país donde la carga fiscal debida al Estado, a la Iglesia y a los señores era más elevada. En el eje Coimbra/Viséu, hacia el norte, la protesta subversiva se asemejaba a un levantamiento campesino. Al sur, Alentejo y Algarve, regiones menos pobladas y ricas, la revuelta osciló entre la "guerra revolucionaria" y el simple vandalismo político.

En España la resistencia antifrancesa tuvo un carácter semejante, aunque produjo resultados diferentes. En el país vecino se verificó la caída transitoria del Antiguo Régimen y la proclamación de la Constitución de 1812. Carlos IV y Fernando VII habían abdicado de sus derechos y se encontraba en el poder Napoleón, no pudiendo por ello ser mostrados como fuente de legitimidad revolucionaria o de la política nacionalista contra el opresor francés. Los revoltosos, sin suficiente ayuda militar de los británicos, se valieron por sí mismos, convirtiéndose en depositarios de la soberanía, iniciando un proceso que desembocaría en las Cortes de Cádiz. En Portugal, el que fuera considerado el mayor movimiento popular de su historia debilitó el sistema político y social, si bien no lo cambió de inmediato. Hay varias explicaciones.

En junio, los "grandes", para conservar la cabeza, bienes y cargos, percibiendo los riesgos de la revolución

y la inutilidad de oponerse a ella en alianza con los franceses, sólo tenían un camino. Con la regencia instalada en Brasil y la jurisdicción del Estado disminuida, no les quedaba más que colocarse al frente del levantamiento con el propósito de limitarlo desviándolo de sus objetivos subversivos. La estrategia resultaría en buena parte del territorio, surgiendo juntas de gobierno encabezadas por los notables locales con el propósito de domesticar a las multitudes amotinadas y dar a la revuelta una dirección menos anárquica, asumiendo la autoridad civil y militar en nombre del regente. El movimiento comenzó en Trás-os-Montes, por iniciativa del gobernador de la provincia, pero la más importante fue la Junta de Oporto, liderada por el propio obispo.

La constitución de estos órganos no trajo inmediatamente la tranquilidad y la paz públicas, limitándose a llenar el vacío de poder. Faltaba lo más difícil, o sea, garantizar la conservación de las jerarquías sociales y expulsar a los invasores. La nobleza, el clero y la magistratura, por razones de sobrevivencia, se voltearon contra los invasores, confiriendo un carácter nacional a la guerra de liberación. Las juntas, con la ayuda de la Iglesia, en una reedición de la clásica alianza del Antiguo Régimen entre el trono y el altar, sostuvieron al Estado hasta que el Ejército británico entrase en acción y fuesen creadas las condiciones para la instalación de un gobierno central al que todos obedeciesen.

Estas juntas, apoyadas por el pueblo en armas, fueron constituidas por hidalgos, eclesiásticos y magistrados que se asumían depositarios de la legitimidad revolucionaria, de origen popular, en nombre de la Corona de los Bragança. Don João se hallaba exiliado, es cierto, pero libre, por lo que todos le declaraban fidelidad. A la inversa de lo que ocurría en España, las juntas aceptaron la regencia, aunque como ésta se hallaba lejos e incomunicada, con el tiempo su autoridad derivó de la voluntad del pueblo, considerado soberano por breves momentos. La resistencia ante los ejércitos imperiales reclamaba más de la Corona que de la Nación. Así, cuando los ingleses expulsaron a Junot de Lisboa y se recompuso el Consejo de la Regencia dejado por Don João, en noviembre de 1807, las juntas no tomaron el poder.

Por otro lado, el elemento burgués nunca se colocó al frente de las juntas ni se impuso a la nobleza señorial, despreciada por sus actitudes colaboracionistas, como sucedió en las Cortes de Cádiz. Reducida en número por la extrema pobreza y la falta de desarrollo del país,

con una incipiente conciencia de su papel político, las “clases medias” no tomaron el lugar de padre o hidalgo en la conducción de la revuelta. Por el contrario, se aliaron a los “grandes” para someter a los “pequeños”, fortalecieron las instituciones tradicionales y la ideología que las justificaba, no respondiendo al orden social impuesto. En este contexto surgirán dos líneas de fuerza fundamentales en la historia portuguesa del siglo XIX. El conjunto de fuerzas capaz de hacer la “revolución” tenía que incluir al pueblo, transformándolo en actor político de primera categoría. Sin la plebe en la calle, los notables, civiles y militares estaban condenados a perder y a quedar aislados y vulnerables. Por otro lado, la dirección natural de la “gente menuda” no cabía a la burguesía. Sobre todo en los campos, el padre y el propietario rural mantuvieron el dominio hasta el final del siglo. Lisboa sería la excepción, aunque mientras se mantuviese la capital neutralizada, la revolución se perdía bajo el peso de la provincia católica y señorial.

Parece imposible cómo las fuerzas populares, dejadas a su suerte, consiguieron, en pocas semanas, afrontar el poderío de los vencedores de Austerlitz y de Lena. Al contrario de los invasores, no tenían jefes, disciplina, experiencia, equipamiento militar y dinero que bastase. El Estado se encontraba destruido y el Ejército no existía. La desproporción de los medios condujo a Junot al error clásico: evaluó mal la situación y subestimó al enemigo. El comando militar francés reaccionó a la afrenta siguiendo los cánones del arte de la guerra que habían hecho la gloria de los ejércitos imperiales. Dicha revolución era más un asunto policial que una verdadera preocupación. Los bandos caóticos del pueblo alzado serían, pues, puestos en orden con dos o tres variedades de tropas, seguidas de ejercicios represivos que sirvieran de ejemplo. No se percibía que la destrucción del Estado hubiera dejado a los patriotas sin una sede, sin una guía institucional, sin una cadena jerárquica a seguir, o sea, no era posible identificar un foco de resistencia. Estos se multiplicaban por centenas a través de villas y aldeas del país. De nada valía a los generales de Junot ocupar dos o tres ciudades y villas importantes, porque eso no les garantizaba el control del interior amotinado. Las poblaciones que eran conquistadas se levantaban en cuanto los franceses se marchaban. Dicho de otra forma, no existían infieles reconocibles. Todos y ninguno eran el enemigo. No se estaba ante una guerra convencional, sino ante tácticas de guerrilla más difíciles de someter: los paisanos emboscaban preferente-

mente a pequeños grupos, soldados aislados, secciones que se hubiesen separado del grueso de las columnas. Los franceses contraatacaban de la única forma posible tratándose de guerrillas: tomando represalias contra poblaciones civiles, inocentes y desarmadas, masacrando a viejos, enfermos, mujeres y niños por todas partes. La peor de todas se dio en Évora, en Alentejo. El 29 de julio, 10 mil soldados asesinaron a cerca de ocho mil personas de todos los estratos y condiciones. O doblegaban la resistencia o eran doblegados por ella.

El 1 de agosto, en la playa de Lavos, próxima de Figueira da Fo, Sir Arthur Wellesley hacía desembarcar un contingente del Ejército inglés, compuesto de cerca de 14 mil soldados. Sin el suceso de la rebelión interna difícilmente el futuro duque de Wellington se arriesgaría a semejante maniobra. Más que impedir la masacre cometida por los franceses, Wellesley estaba interesado en abrir una plataforma de penetración en la península ibérica y conseguir un puerto libre para la armada británica en el Atlántico. Lisboa sería, pues, el objetivo.

La desertión española y las derrotas militares de Roça (7 de agosto) y de Vimeiro (21 de agosto) determinaron el fin de la I Invasión Francesa. Junot acabó por rendirse en los términos de la “Convención de Sintra”, firmada el 30 de agosto de 1808. El acuerdo fue negociado entre los generales ingleses y franceses sin la intervención portuguesa. La capitulación se realizó a favor de los galos. Estos abandonaron las plazas ocupadas y, en cambio, recibieron el derecho a seguir en los navíos británicos, que los llevarían a casa, pudiendo llevar consigo todas las armas y municiones, caballos y bagaje que cupiesen en los depósitos, con el beneplácito de Wellesley. La tropa inglesa no se comportaba como un Ejército auxiliar, sino de ocupación. El armisticio autorizó el saqueo y los derrotados aprovecharon, embarcando muebles, ropas, joyas, cuadros, libros, etcétera, ante las protestas de la Junta de Oporto, de algunos jefes militares y de las autoridades civiles de Lisboa. A mediados de octubre, cuando los últimos soldados franceses dejaron Lisboa, no llevaban consigo gloria o provincias para engrandecer el Imperio, pero sí las bolsas repletas.

La expulsión del enemigo no trajo la paz. En las semanas que siguieron, el caos se mantuvo, pues continuaron las persecuciones y las represalias contra los traidores. Por otro lado, la amenaza gala en el lado español de la frontera no había sido eliminada, percibiéndose que los franceses podrían volver en cualquier momento. El general Soult entró en Trás-os-Montes, en

marzo de 1809, dando inicio a la II Invasión. La revuelta popular se mantendría sin cambiar de carácter hasta 1811, cuando la III Invasión de Massena sería derrotada y los agresores expulsados definitivamente.

A todo esto no asistió Don João, retirado en una finca de Río de Janeiro. Aunque los ejércitos imperiales se habían marchado, el regente se empeñó en permanecer en su exilio tropical, de donde regresaría hasta 1821. El año de 1808 había cambiado su reino para siempre. La ocupación del Portugal europeo y la instalación de la Corte en Brasil provocarían la ruptura del sistema imperial luso-brasileño, sellada con la publicación de la Carta Real del 28 de enero de 1808, a través de la cual se abrieron los puertos brasileños a los navíos ingleses y a los que pertenecían a las naciones en paz con el país. Se establecía, de esta forma, un área comercial brasileña, en condiciones de libertad de tráfico, garantizada por el poder naval británico. En los hechos, se acentuaban la definición misma de territorio sudamericano y sus posibilidades autonómicas. Cerca de dos años más tarde, el 19 de febrero de 1810, Portugal fue compelido a firmar el Tratado de Comercio y Navegación con Gran Bretaña, extremadamente oneroso para los comerciantes nacionales, como nueva señal de las relaciones entre ambos países. Estos eran los puentes que establecerían el dominio británico en Portugal hasta las vísperas de la Revolución liberal de 1820, una vez despachado el invasor francés. A principios de 1809 llegaría a Lisboa el brazo derecho de Arthur Wellesley, el general William Beresford, que rápidamente habría de convertirse en una especie de "virrey" plenipotenciario de Portugal.

Desde Brasil, Don João iba enterándose de las novedades con atraso, no dando señales de querer regresar a

Europa y, al mismo tiempo, sin darse cuenta, construía la independencia del territorio sudamericano. La sede de la monarquía se transfirió a Río de Janeiro y Portugal quedó convertido en posesión ultramarina. La presencia de la Corte impidió la fragmentación de Brasil, como habría de ocurrir con la América española. El regente se esforzó por dotar a su nueva capital de todos los organismos necesarios para el desempeño de tal papel. Surgieron, como réplicas de los que se dejaron en Lisboa, los tribunales reales de la Mesa de Desembargo de Palacio, y de Conciencia y Órdenes; instituciones financieras como el Erario Real, el Consejo de Hacienda y la Junta de Comercio; organizaciones policiales como la Intendencia General y la Guardia Real de Policía; obras culturales como la Capilla Real, la Tipografía Real y el Teatro de São João; estructuras económicas como la Real Fábrica de Pólvora y el Banco de Brasil. En términos periféricos, fueron creados asimismo municipios y comarcas que aseguraron la unidad política de aquel territorio. Esta reforma profunda afectaría irreversiblemente la vida de la ciudad y de Brasil, cuyas élites no estarían ya en disposición de volver a la situación colonial.

El ensayo de resistencia popular iniciado en 1808 dejaría huellas profundas en la sociedad portuguesa. La colaboración de la nobleza, el clero y la magistratura con los invasores afectaría el prestigio de estos grupos y debilitaría el orden social del Antiguo Régimen. Además, desde 1807 habían pasado por el reino millares de españoles, franceses e ingleses, portadores de culturas extrañas e ideologías revolucionarias, que dejarían una simiente. Los oficiales del Ejército más esclarecidos y los jueces, aliados de las "clases medias" y el pueblo, más temprano o más tarde, reclamarían esa herencia. ■

REFERENCIAS

- Alexandre, V. A. (1992), *Os Sentidos do Império*, Porto, Afrontamento.
- Fernandes, P. J. (1999), "Contradições e dependências da diplomacia nacional (1789-1815). Portugal no tempo das ligações perigosas", *História*, núm. 19.
- Pedreira, J. y F. D. Costa (2006), *Reis de Portugal – D. João VI*, Lisboa, Círculo de Leitores.
- Schwarz, L. M. (2002), *A longa viagem da biblioteca dos reis. Do terramoto de Lisboa à Independência do Brasil*, São Paulo, Companhia das Letras.
- Valente, V. P. (2007), *Ir prò Maneta. A Revolta contra os Franceses (1808)*, Lisboa, Alêtheia Editores.